

PRIMER EJERCICIO

GRUPO A: LEGISLACIÓN

SUBGRUPO A.2: DERECHO NUCLEAR

TEMA 15: El procedimiento sancionador en materia de seguridad nuclear y de protección radiológica. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes. Competencias del Consejo de Seguridad Nuclear en la materia.

INDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO Y RELACIÓN CON OTROS TEMAS.
2. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD NUCLEAR Y DE PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR EN LA MATERIA.
3. DELITOS RELATIVOS A LA ENERGÍA NUCLEAR Y A LAS RADIACIONES IONIZANTES.
4. BIBLIOGRAFÍA

1. RESUMEN EJECUTIVO Y RELACIÓN CON OTROS TEMAS.

El procedimiento sancionador es la sucesión de actos a través de los cuales la Administración ejerce la potestad sancionadora. Se regula en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) interviene con carácter previo al inicio del procedimiento sancionador propiamente dicho, a través de propuestas de oficio de iniciación de expedientes sancionadores que se deliberan en el Comité de Revisión de Expedientes Sancionadores (CRES) previamente a su remisión al Pleno y una vez instruido el mismo en caso de que sea aplicable, según el artículo 91 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear y el artículo 2.e) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear.

La actividad coercitiva del CSN también se manifiesta en los apercibimientos o las amonestaciones, que son potestades directas atribuidas mediante la Ley. En el CRES se debaten los apercibimientos a las instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible.

Para completar el régimen punitivo en esta materia se verán también los delitos relacionados con la energía nuclear y radiaciones ionizantes, en campo ya del derecho penal, en el que interviene el dolo o intencionalidad. Por la especial peligrosidad de la materia contemplan penas relevantes y son objeto de regulación en una sección específica.

Este tema se relaciona con los siguientes:

PRIMER EJERCICIO

Grupo A. Subgrupo A.2. Tema 11. El Consejo de Seguridad Nuclear. Normas reguladoras. Naturaleza, características y funciones del Consejo. Sus órganos y competencias. La capacidad normativa del Consejo. El Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Funciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con las instalaciones nucleares y radiactivas.

Grupo A. Subgrupo A.2. Tema 14. La Ley de 29 de abril de 1964 sobre Energía Nuclear. Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas. Régimen de autorizaciones de estas instalaciones: Instrucciones Técnicas Complementarias. Reglamento sobre protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a radiaciones ionizantes. El Plan Básico de Emergencia Nuclear. Directriz básica de protección civil ante el riesgo radiológico. La protección física de las instalaciones, los materiales nucleares y las fuentes radiactivas.

2. EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR EN LA MATERIA

La Constitución Española establece en su artículo 25 que *"nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento"*, lo que se conoce como el **principio de legalidad penal**, aplicable también al derecho sancionador.

La Constitución Española introdujo en nuestro ordenamiento jurídico el principio de **reserva de ley** en la determinación objetiva de la relación de infracciones y sanciones.

El procedimiento sancionador es la sucesión de actos a través de los cuales la Administración ejerce la potestad sancionadora. Se regula en la *Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas*, como especialidad del procedimiento administrativo común, sin perjuicio de que reglamentariamente puedan establecerse especialidades del procedimiento, siendo la *Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público* la que enuncia los principios que informan el ejercicio de la potestad sancionadora.

Es tradicional distinguir el derecho administrativo sancionador del derecho penal por un dato formal, la autoridad que impone las sanciones y la que impone las penas, ya que mientras que las primeras son impuestas por la Administración, las segundas lo son por los órganos jurisdiccionales.

En materia sancionadora la claridad de las normas es fundamental, de modo que sean comprensibles para el ciudadano medio. De la inobservancia de las normas administrativas se pueden deducir consecuencias muy graves para los agentes involucrados en el sector de la seguridad nuclear y protección radiológica.

De acuerdo con el art. 2 e) de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, el Consejo tiene la función de *“proponer la apertura de los expedientes sancionadores que considere pertinentes en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la legislación vigente”*.

Asimismo, el Consejo de Seguridad Nuclear, iniciado un procedimiento sancionador en materia de seguridad nuclear, protección radiológica o protección física emitirá, con carácter preceptivo, un informe en el plazo de tres meses, para la adecuada calificación de los hechos objeto de procedimiento. Este informe se emitirá cuando dicha iniciación lo fuera a instancia de otro organismo, o en el supuesto de que habiéndose incoado como consecuencia de petición razonada del propio Consejo de Seguridad Nuclear, consten en dicho procedimiento otros datos además de los comunicados por dicho ente”.

De acuerdo con el art. 85 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energía Nuclear (en adelante LEN), y sin perjuicio de las eventuales responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de la responsabilidad material que resulte de la comisión de hechos sancionables, **el titular de la instalación o responsable de la actividad se considerará responsable en atención a sus deberes de vigilancia y control sobre la actividad.**

El catálogo de sanciones en esta materia de seguridad nuclear y protección radiológica está definido en el capítulo XIV de la citada LEN, donde se contempla el cuadro de infracciones y sanciones, de la siguiente manera (art. 86 LEN):

Son infracciones administrativas “las acciones u omisiones que supongan incumplimiento o inobservancia de lo dispuesto en la Ley 25/1964, en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear y en sus disposiciones de desarrollo, así como en tratados y convenios suscritos y ratificados por España.”

Por su gravedad, las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves; el elemento fundamental que sirve para establecer la diferencia entre unas y otras es la existencia o no, en la producción de los hechos, de **peligro grave** para la seguridad o salud de las personas o **daño grave** a las cosas o al medio ambiente.

a) Son infracciones **muy graves**:

1. El ejercicio de cualquier actividad regulada por esta Ley o sus normas de desarrollo sin haber obtenido la preceptiva habilitación, o bien cuando esté caducada, suspendida o revocada siempre que de ello se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.
2. La inobservancia del requerimiento del Consejo de Seguridad Nuclear, sus agentes u otras autoridades competentes, de cesar la actividad en curso o de llevar a parada la operación de la instalación nuclear o radiactiva de que se trate.
3. El incumplimiento de los términos, límites o condiciones incorporados a las autorizaciones, así como la no aplicación de las medidas técnicas, administrativas o de otro orden que se impongan a una actividad o al funcionamiento de una instalación o el incumplimiento de los plazos señalados para su puesta en práctica, cuando se derive peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.
4. El incumplimiento del contenido de las instrucciones emitidas en desarrollo de las citadas autorizaciones o licencias, cuando se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.
5. La no adopción de medidas técnicas, administrativas o de otro orden para la corrección de deficiencias en la actividad conocidas por el titular, cuando se derive peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.
6. El funcionamiento de instalaciones nucleares o radiactivas o la manipulación de materiales radiactivos sin disponer del personal provisto de licencia, diploma o acreditación requeridos para la dirección o ejecución de las operaciones, cuando se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.
7. El incumplimiento de las obligaciones propias del personal con licencia, así como de los términos y condiciones incorporados a la misma, cuando se derive peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.
8. La operación de instalaciones o la realización de actividades que puedan suponer exposición a radiaciones, de origen artificial o natural, sin adoptar las medidas necesarias para su desarrollo de acuerdo con los principios, límites y procedimientos establecidos en materia de protección sanitaria contra las radiaciones ionizantes, tanto en situaciones normales como en caso de exposiciones accidentales o emergencias, cuando se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.
9. La manipulación, traslado o disposición de materiales radiactivos o equipos productores de radiaciones ionizantes, que hayan sido precintados o intervenidos por razones de seguridad nuclear o protección radiológica.
10. El abandono o la liberación de materiales radiactivos, cualquiera que sea su estado físico o formulación química, a la atmósfera, agua, suelo o subsuelo, cuando por la magnitud y características de los mismos, se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

10 bis. El incumplimiento por los titulares de las actividades o por los propietarios de los suelos o terrenos de las obligaciones de notificación, registro y restauración ambiental previstas en esta ley en relación con los suelos o terrenos contaminados, o con restricciones de uso, o potencialmente contaminados radiológicamente, cuando se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

11. La adición deliberada de material radiactivo en la producción de alimentos, juguetes, adornos personales y cosméticos, cuando se derive peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

12. El suministro o transferencia de materiales radiactivos a personas o entidades que no dispongan de la autorización requerida para su posesión y uso o sin que esas sustancias o materiales cumplan los requisitos establecidos sobre identificación y marcado, cuando se derive peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

13. No disponer de los sistemas requeridos para almacenamiento, tratamiento y, en su caso, evacuación de efluentes o residuos radiactivos, siempre que de estas conductas se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

14. No proceder al desmantelamiento y clausura de instalaciones nucleares o radiactivas una vez finalizado el funcionamiento de las mismas o no disponer un destino en condiciones de seguridad para los materiales radiactivos en desuso, cuando se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

15. El ejercicio de cualquier actividad regulada por la presente Ley, o en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y sus disposiciones de desarrollo, sin tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que la misma pudiera causar, en los términos establecidos en la normativa específica de aplicación.

Si la infracción se refiere a un transporte de material radiactivo, el presente apartado será aplicable únicamente si afecta a un transporte de combustible nuclear, irradiado o no, o de residuos radiactivos que revistan una concentración tal de radionucléidos que deba tenerse en cuenta la generación de energía térmica durante su almacenamiento y evacuación.

16. El impedimento del acceso al personal facultativo designado por las autoridades nacionales e internacionales legalmente habilitadas y al personal que le acompañe, acreditado por éstas, a instalaciones nucleares o radiactivas a otros locales o lugares, cualquiera que sea la actividad desarrollada en éstos, cuando sea necesario para el desarrollo de la actividad inspectora.

17. La obstrucción a la inspección, evaluación o control del personal facultativo designado por las autoridades legalmente habilitadas y al personal que le acompañe acreditado por éstas mediante el impedimento de la toma de muestras o medidas, o la ocultación o denegación de documentos o información, o la aportación de documentación o información falsa o deliberadamente incompleta, sea o no solicitada por aquéllos, cuando por su naturaleza y contenido fuera necesario para el establecimiento de las conclusiones de la inspección, evaluación o control, cuando se derive un peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

18. El incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de información y notificación en tiempo y forma a las autoridades legalmente habilitadas o a sus agentes, cuando se derive peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

19. El incumplimiento deliberado del deber de remisión de información, la aportación intencionada de documentación falsa o incompleta, la pérdida de control del material fisiónable especial cuando dicho material pueda tener un uso directo como parte de un dispositivo nuclear explosivo y no se recupere, la obstrucción a la inspección, evaluación o control por parte del personal facultativo designado por las autoridades nacionales o internacionales legalmente habilitadas y el desarrollo de actividades sujetas al régimen de no proliferación nuclear cuando éstas se desarrollen voluntariamente con el fin de coadyuvar a la fabricación de un dispositivo nuclear explosivo, aun cuando no se manejen materiales nucleares, cuando de cualquiera de estos incumplimientos se derive la imposibilidad del cumplimiento de las obligaciones en materia de no proliferación nuclear derivadas de los acuerdos internacionales celebrados por España.

20. La insuficiencia o inobservancia de medidas requeridas para evitar la presencia de material no controlado en áreas vitales o protegidas de una instalación nuclear o radiactiva cuando, por su naturaleza y localización, se derive peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

21. La insuficiencia o inobservancia de medidas orientadas a evitar la presencia de personal no autorizado en áreas vitales o protegidas de una instalación nuclear o radiactiva cuando se derive peligro grave para la seguridad o salud de las personas o daño grave a las cosas o al medio ambiente.

b) Son infracciones graves:

1. La realización de acciones u omisiones tipificadas en el epígrafe a) de este artículo, con la excepción de las recogidas en los números 2, 9, 15, 16, 19 y 21, siempre que no se derive peligro grave para la seguridad o salud de las personas ni daño grave a las cosas o al medio ambiente, y que la conducta no esté tipificada como infracción leve.

2. No adoptar las medidas necesarias para la disposición segura de materiales radiactivos encontrados en situaciones fuera de control, sea porque nunca lo han estado o porque han sido abandonados, perdidos, extraviados, robados o transferidos en condiciones irregulares, salvo los casos en que se derive peligro de escasa trascendencia para las personas, o daño a las cosas o al medio ambiente.

3. El incumplimiento de las obligaciones relativas a generación, archivo y custodia de los registros requeridos para el desarrollo de la actividad o para el control de materiales radiactivos, cuando dicho incumplimiento suponga pérdida de la información afectada.

4. No suministrar a los trabajadores la formación o información requeridas para que desarrollen su actividad cumpliendo las normas y procedimientos establecidos sobre seguridad nuclear, protección contra las radiaciones ionizantes, protección física o actuación en caso de emergencia, salvo los casos en que se derive peligro de escasa trascendencia para la seguridad o salud de las personas, o daño a las cosas o al medio ambiente.

5. Las acciones u omisiones que impidan o dificulten al personal de la organización o al personal de empresas externas que presten servicios a la instalación, dentro o fuera de la

misma, el ejercicio del derecho de comunicación de deficiencias o disfunciones que puedan afectar a la seguridad nuclear o protección radiológica o su participación en el esclarecimiento de los hechos, o que supongan medidas discriminatorias para aquellos que hubieran ejercitado tal derecho.

6. El transporte de materiales radiactivos, sin tener cubierta la responsabilidad civil por los daños que la actividad pudiera causar, en los términos establecidos en la normativa específica de aplicación. Si el transporte afecta a combustible nuclear, irradiado o no, o a residuos radiactivos que revistan una concentración tal de radionucléidos, que deba tenerse en cuenta la generación de energía térmica durante su almacenamiento y evacuación, se aplicará el tipo de infracción muy grave previsto en el apartado 15 del artículo 86.a).

7. El incumplimiento deliberado del deber de remisión de información, la aportación intencionada de documentación falsa o incompleta, la pérdida de control del material fisionable especial cuando se recupere y la obstrucción a la inspección, evaluación o control por parte del personal facultativo designado por las autoridades nacionales o internacionales legalmente habilitadas cuando cualquiera de estos incumplimientos dificulte el cumplimiento de las obligaciones en materia de no proliferación nuclear derivadas de los acuerdos internacionales celebrados por España.

8. La insuficiencia o inobservancia de medidas orientadas a evitar la presencia de personal no autorizado en áreas vitales o protegidas de una instalación nuclear o radiactiva.

c) Son infracciones **leves**:

1. La realización de acciones u omisiones tipificadas en el epígrafe a) de este artículo, con la excepción de las recogidas en los números 2, 9, 15, 16, 19 y 21 siempre que no se derive peligro para la seguridad o salud de las personas, o daño a las cosas o al medio ambiente, o se consideren de escasa trascendencia.

2. No adoptar las medidas necesarias para la disposición segura de materiales radiactivos encontrados en situaciones fuera de control, sea porque nunca lo han estado o porque han sido abandonados, perdidos, extraviados, robados o transferidos en condiciones irregulares, en los casos en que no se derive peligro para la seguridad o salud de las personas, o daño a las cosas o al medio ambiente, o éste sea de escasa trascendencia.

3. El incumplimiento de las obligaciones relativas a generación, archivo y custodia de los registros requeridos para el desarrollo de la actividad o para el control de materiales radiactivos, cuando la información afectada sea recuperada.

4. No suministrar a los trabajadores la formación o información requeridas para que desarrollen su actividad cumpliendo las normas y procedimientos establecidos sobre seguridad nuclear, protección contra las radiaciones ionizantes, protección física o actuación en caso de emergencia, cuando no se derive peligro para la seguridad o salud de las personas, o daño a las cosas o al medio ambiente, o éste sea de escasa trascendencia.

5. El incumplimiento meramente formal de las obligaciones en materia de no proliferación nuclear, siempre que ello no dificulte el cumplimiento de las obligaciones en materia de no proliferación nuclear derivadas de los acuerdos internacionales celebrados por España, así como la pérdida de control de material básico.

Se establecen en el texto los siguientes criterios para la interpretación de los conceptos:

1.- En cuanto a la cualificación, el art. 87 dispone que se entenderá que ha existido **peligro grave** para la seguridad o salud de las personas cuando se degrade el funcionamiento seguro de la actividad de tal manera que los dispositivos, mecanismos o barreras de seguridad remanentes, o las medidas administrativas disponibles, no permitan garantizar que se pueda evitar la exposición a radiaciones ionizantes, con dosis correspondientes a la aparición de efectos deterministas.

2.- Asimismo se entenderá que ha existido **daño grave** a las cosas o al medio ambiente cuando, como consecuencia de la exposición a radiaciones ionizantes, se vean afectados los usos presentes o futuros de las cosas o del medio ambiente.

3.- Se entenderá que **no ha existido peligro** para la seguridad o salud de las personas, o que éste es de escasa trascendencia, cuando no se vea afectada significativamente la seguridad de la actividad o instalación, y no se produzcan situaciones de las que pudiera derivarse exposición indebida a radiaciones ionizantes, o de producirse tales situaciones, las dosis estuvieran por debajo de los límites establecidos reglamentariamente.

4.- Finalmente se entiende que ha existido **daño de escasa trascendencia**, cuando no se vean afectados los usos presentes o futuros de las cosas y el medio ambiente.

De acuerdo con el **art. 88** las sanciones se graduarán atendiendo a los principios de proporcionalidad y a las circunstancias especificadas a continuación, en tres grados: máximo, medio y mínimo.

Para la graduación de las correspondientes sanciones se tendrán en cuenta las siguientes circunstancias:

- a) La magnitud del daño causado a las personas, las cosas o el medio ambiente.
- b) La duración de la situación de peligro derivada de la infracción.
- c) El impacto de la conducta infractora sobre la seguridad de la actividad.
- d) La existencia o no de antecedentes de sobreexposición a radiaciones ionizantes del personal trabajador y del público, en el término de dos años.
- e) Los antecedentes de gestión de la seguridad en la actividad en el término de dos años.
- f) El incumplimiento de las advertencias previas, requerimientos o apercibimientos de las autoridades competentes.
- g) La falta de consideración de las comunicaciones del personal trabajador, de sus representantes legales o de terceros, relacionadas con la seguridad nuclear o la protección radiológica.
- h) El beneficio obtenido como consecuencia de la comisión de la infracción.
- i) La existencia de intencionalidad o negligencia en la comisión de la infracción, cuando estas circunstancias no estén consideradas en la tipificación de la infracción y la reiteración.
- j) La diligencia en la detección e identificación de los hechos constitutivos de la infracción y en su comunicación a las autoridades competentes.

k) El haber procedido el responsable a la subsanación inmediata de las causas y efectos derivados de la infracción por su propia iniciativa.

l) La colaboración con la autoridad competente en el esclarecimiento de los hechos.

m) La reincidencia, por comisión en el término de dos años, de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.

n) La cantidad de material nuclear fuera de control y su recuperación o no, cuando esta última circunstancia no esté contemplada en la tipificación de la infracción.

En cuanto a las **sanciones**, el **art. 89** establece lo siguiente, en función del tipo de instalación o de actividad en la que se hayan producido los hechos sancionables:

1. Cuando se trate de centrales nucleares, las infracciones tipificadas en esta Ley se sancionarán:

Las muy graves, con multa en su grado mínimo desde 9.000.001 hasta 15.000.000 de euros, en su grado medio desde 15.000.001 hasta 20.000.000 de euros, y en su grado máximo desde 20.000.001 hasta 30.000.000 de euros.

Las graves, con multa en su grado mínimo desde 300.001 euros hasta 1.500.000 euros, en su grado medio desde 1.500.001 euros hasta 4.500.000 euros y en su grado máximo desde 4.500.001 hasta 9.000.000 de euros.

Las leves, con multa, en su grado mínimo de 15.000 euros, en su grado medio desde 15.001 euros hasta 150.000 euros y en su grado máximo desde 150.001 euros hasta 300.000 euros.

2. Cuando se trate de instalaciones nucleares que no sean centrales nucleares, las infracciones tipificadas en esta Ley se sancionarán:

Las muy graves, con multa en su grado mínimo desde 3.000.001 euros hasta 5.000.000 de euros, en su grado medio desde 5.000.001 hasta 7.000.000 de euros, y en su grado máximo desde 7.000.001 hasta 10.000.000 de euros.

Las graves, con multa en su grado mínimo desde 100.001 euros hasta 500.000 euros, en su grado medio desde 500.001 euros hasta 1.500.000 euros, y en su grado máximo desde 1.500.001 hasta 3.000.000 de euros.

Las leves, con multa en su grado mínimo de 12.000 euros, en su grado medio desde 12.001 euros hasta 50.000 euros, y en su grado máximo desde 50.001 hasta 100.000 euros.

3. Cuando se trate de instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría, Unidades Técnicas de Protección Radiológica, Servicios de Protección Radiológica, Centros de Dosimetría, Empresas de Venta y Asistencia Técnica de equipos de rayos X médicos, transporte de material radiactivo, o de otras actividades y entidades reguladas en esta Ley y en sus normas de desarrollo, las infracciones tipificadas en esta Ley se sancionarán:

Las muy graves: Desde 150.001 hasta 200.000 euros en grado mínimo, desde 200.001 hasta 400.000 euros en grado medio y desde 400.001 hasta 600.000 euros en grado máximo.

Las graves: Desde 6.001 hasta 15.000 euros en grado mínimo, desde 15.001 hasta 30.000 euros en grado medio y desde 30.001 hasta 150.000 euros en grado máximo.

Las leves: 1.200 euros en grado mínimo, desde 1.201 hasta 3.000 euros en grado medio y desde 3.001 hasta 6.000 euros en grado máximo.

4. Cuando se trate de instalaciones radiactivas de primera categoría o de transportes de fuentes radiactivas correspondientes a la actividad principal de dichas instalaciones, las multas se reducirán, para todos sus grados, a un tercio de las establecidas en el apartado 2 de este artículo.

5. Si se trata de transportes de combustibles nucleares, irradiados o no, o de residuos radiactivos que revistan una concentración tal de radionucléidos que deba tenerse en cuenta la generación de energía térmica durante su almacenamiento y evacuación, las multas se reducirán, para todos sus grados, a dos tercios de las establecidas en el apartado 2 de este artículo.

6. Las infracciones muy graves podrán dar lugar, conjuntamente con las multas previstas, a la revocación, retirada o suspensión temporal de las autorizaciones, licencias o inscripción en registros. La efectividad de estas medidas podrá asegurarse procediendo a la intervención o al precintado de las sustancias nucleares, de los materiales radiactivos o equipos productores de radiaciones ionizantes o a la implantación de cualquier medida de carácter provisional que resulte aplicable.

Igualmente podrán dar lugar a la inhabilitación temporal o definitiva al acceso a la condición de titular de cualquier tipo de autorización o licencia regulada por la presente Ley, en la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear y en sus disposiciones de desarrollo.

Mediante el art. 90 se establecen **otras medidas**: La incoación de un expediente por infracción de los preceptos de la presente Ley o de los Reglamentos que la desarrollen, determinará, si procede, previo acuerdo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio¹, la intervención inmediata del combustible nuclear o de los materiales radiactivos y la consiguiente prohibición para adquirir nuevas cantidades de combustibles o materiales en tanto no hayan desaparecido las causas que motivaron dicha intervención.

El art. 91 se refiere a que el **procedimiento para la imposición de las sanciones** se ajustará a los **principios** de ciertos artículos de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y a lo dispuesto en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora (ya derogado), a excepción del plazo máximo para la tramitación y notificación de la resolución del mismo, que será de un año.

Estas referencias deben entenderse hechas a los **artículos 25 a 31 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público**, que regula los **principios de la potestad sancionadora**, sin olvidar que las normas procedimentales concretas para la

¹ La referencia debe entenderse al actual Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales y el Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

imposición de sanciones se regulan en cada una de las leyes reguladoras de los distintos sectores de actuación administrativa. Por tanto, la LEN se remite a la regulación o criterios generales que establece el ordenamiento administrativo general, a sus principios.

Finalmente, de acuerdo con el art. 93:

1. Las infracciones y sanciones previstas en este capítulo **prescribirán**:

a) Las infracciones muy graves, a los cinco años, las graves a los tres años y las leves al año.

b) Las sanciones impuestas por faltas muy graves a los cinco años, las impuestas por faltas graves a los tres años y las impuestas por faltas leves al año.

2. El **plazo de prescripción** de las infracciones comenzará a contarse desde el **día en que la infracción se hubiera cometido**. En las infracciones derivadas de una **actividad continuada**, la fecha inicial del cómputo será

- la de finalización de la actividad,
- la del último acto en el que la infracción se consume
- o en el momento en que se detecte por la Administración competente la existencia de la infracción.

Interrumpirá la prescripción la iniciación del procedimiento sancionador, con el conocimiento del interesado, reanudándose el plazo de prescripción si el expediente sancionador estuviera paralizado durante más de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El tiempo de prescripción de las sanciones comenzará a contarse desde la fecha en que la resolución sancionadora sea firme, interrumpiéndose la prescripción por la iniciación, con el conocimiento del interesado, del procedimiento correspondiente».

En el ámbito de la Administración General del Estado, la competencia para la **iniciación e instrucción de los expedientes sancionadores** previstos en este capítulo corresponderá a los órganos y unidades que integran la Dirección General de Política Energética y Minas².

- La Ley dice que en el ámbito de la Administración del Estado, las **sanciones** por infracciones **muy graves cometidas por titulares de instalaciones nucleares o radiactivas de primera categoría** serán impuestas por el **Consejo de Ministros**, las **graves** por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y las **leves** por el Director General de Política Energética y Minas.

Cuando se trate de sanciones por infracciones muy graves cometidas por los titulares de **instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría y restantes actividades reguladas** por esta Ley o sus normas de desarrollo, serán impuestas por el Ministro de Industria, Turismo y Comercio, y por el Director General de Política Energética y Minas en los supuestos de infracciones graves y leves.

² Actual **Dirección General de Planificación Energética y Minas** en virtud del Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.

Las referencias al Ministro de Industria, Turismo y Comercio deben entenderse realizadas a la **Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico**, según el *Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales* y el *Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales*. Las referencias al Director General de Política Energética y Minas deben entenderse al actual **Director General de Planificación y Coordinación Energética**, en virtud del *Real Decreto 503/2024, de 21 de mayo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico*, y se modifica el *Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales*, que asume dichas competencias, ya que la Dirección General de Política Energética y Minas se desliga de las competencias en materia nuclear (hidrocarburos y nuevos combustibles, energía eléctrica, minas, energías renovables, infraestructura...).

En el ámbito de las Comunidades Autónomas se estará a lo previsto en su propia normativa.

El Gobierno, mediante Real Decreto, podrá actualizar la cuantía de las multas establecidas en esta Ley, de acuerdo con las variaciones que experimente el índice de precios al consumo.

En materia de transporte de materiales radiactivos será de aplicación el presente cuadro sancionador en aquellos aspectos específicamente regulados por esta Ley o sus normas de desarrollo, sin perjuicio de las infracciones y sanciones establecidas en la legislación básica sobre ordenación del transporte.

COMPETENCIAS DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR EN LA MATERIA.

A continuación, se describe el conjunto de facultades que tiene el CSN en esta materia:

- El Consejo de Seguridad Nuclear **propondrá, en su caso, la iniciación del correspondiente expediente sancionador** respecto de aquellos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción en materia de seguridad nuclear, protección radiológica o protección física, poniendo en conocimiento del órgano al que corresponda incoar el expediente tanto los hechos constitutivos de la infracción apreciada como las circunstancias relevantes que sean necesarias para su adecuada calificación.

- Asimismo, **iniciado un expediente sancionador** en materia de seguridad nuclear, protección radiológica o protección física, el Consejo de Seguridad Nuclear emitirá, con carácter preceptivo, un **informe en el plazo de tres meses**, para la adecuada calificación de los hechos objeto del procedimiento. Este informe se emitirá cuando dicha iniciación no fuera a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, o en el supuesto en que, habiéndolo sido, consten en dicho procedimiento otros datos además de los comunicados por dicho ente.

Dicho informe del Consejo de Seguridad Nuclear producirá la suspensión del plazo de resolución del procedimiento sancionador, hasta su emisión, y en todo caso, hasta un máximo período de tres meses desde que fue requerido.

En el caso de la presunta comisión de infracciones que pudieran calificarse como leves, el Consejo de Seguridad Nuclear **de modo alternativo** a la propuesta de apertura de expediente sancionador podrá **apercibir** al titular de la actividad y requerir las medidas correctoras que correspondan, cuando las circunstancias del caso así lo aconsejen y siempre que no se deriven daños y perjuicios directos a las personas o al medio ambiente.

Si este requerimiento no fuese atendido, el Consejo de Seguridad Nuclear podrá imponer **multas coercitivas** por un importe que será, la primera vez, del diez por ciento, y las segundas y sucesivas del veinte por ciento del valor medio de la sanción que correspondiera imponer, en su grado medio, con el fin de obtener la cesación de conductas activas u omisivas que resulten contrarias a las prescripciones de la presente Ley, de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de Creación del Consejo de Seguridad Nuclear, y sus disposiciones de desarrollo.

- Con independencia de la sanción que pudiera corresponder en su caso al titular, el Consejo de Seguridad Nuclear podrá **amonestar por escrito** a la persona física que, mediante negligencia grave, sea responsable de la realización de una mala práctica por la que se haya originado la comisión material de hechos susceptibles de sanción.

El **Comité de Revisión de Expedientes Sancionadores (CRES)** es un órgano colegiado interno del CSN presidido por el secretario general (presidente), que es competente, antes de someterlo para su consideración al Pleno de los siguientes expedientes:

- Propuestas de expedientes sancionadores y apercibimientos a instalaciones nucleares.
- Propuestas de expedientes sancionadores a instalaciones radiactivas.

Los expedientes de apercibimiento a Instalaciones radiactivas de 2ª y 3ª categoría y actividades conexas y transportes, están delegados por el Pleno del CSN en los Directores Técnicos (Acuerdos de 17 de julio de 2000 y de 11 de noviembre de 2009) y no se debaten en el CRES.

El CRES se regula en el procedimiento interno *PG.IV.05 “Actuaciones del CSN en procedimientos sancionadores en materia de seguridad nuclear y protección radiológica”* y en el *“Manual de Organización y Funcionamiento”*.

La regulación de los criterios para formación de la voluntad del CSN a la hora de apercibir o de iniciar la propuesta de expediente sancionador figura en los procedimientos *PG.IV.03. “Inspección y control de instalaciones nucleares y radiactivas del ciclo del combustible”* y *PG.IV.06 “Control de instalaciones radiactivas y otras actividades reguladas conexas”*, según su ámbito de actuación. Se fijan los criterios para que se pueda apercibir si se dan todas y cada una de las circunstancias que se especifican (circunstancias que se han inspirado en las del artículo 88 de la LEN que permiten valorar al CSN si se trata de infracciones leves susceptibles de apercibimiento).

Por último, el CSN puede proponer medidas cautelares, establecidas en el art. 92 de la LEN:

El órgano competente para imponer la sanción podrá acordar, a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, entre otras, las siguientes medidas provisionales:

- a) Medidas de corrección, seguridad o control que impidan la continuidad en la infracción o en la producción del riesgo o daño.
- b) Precintado de aparatos o equipos.
- c) Incautación de materiales o equipos.
- d) Suspensión temporal, parcial o total del funcionamiento de las instalaciones o de la ejecución de las actividades.

Las medidas señaladas en el apartado anterior podrán ser acordadas antes de la iniciación del procedimiento administrativo sancionador o durante el mismo, en las condiciones establecidas en los artículos 72 y 136 de la Ley 30/1992, sobre Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común. Estas referencias deben entenderse a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, concretamente a los artículos 56 (medidas provisionales dentro del procedimiento administrativo común) y 64.2 e), 89.3 y 90.3 (dentro de la iniciación y resolución de los procedimientos de naturaleza sancionadora).

3. DELITOS RELATIVOS A LA ENERGÍA NUCLEAR Y A LAS RADIACIONES IONIZANTES.

Los artículos contemplados en la **Sección 1ª “De los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes”**, del **Capítulo I “De los delitos de riesgo catastrófico”**, del **Título XVII “De los delitos contra la seguridad colectiva”**, dentro del Libro II del Código Penal vigente, aprobado por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, puede decirse que son fiel trasunto de los antiguos delitos contemplados en *la Ley de Energía Nuclear*, artículos que fueron derogados precisamente por la aparición del Código Penal de 1995.

Hay que destacar las modificaciones llevadas a cabo por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que otorga nueva redacción a los artículos 343 y 345 de esta Sección.

Al margen de las coincidencias básicas en los tipos penales, las figuras deben encajarse en un *novedoso sistema de penalización*, que es la auténtica novedad con relación al texto de la antigua LEN.

Los diversos tipos regulados en esta Sección tienen por objeto la tutela de la **vida, la integridad y la salud de las personas**, no desde un punto de vista individual, sino colectivo, frente a los riesgos potencialmente catastróficos que pudieran nacer del regular el empleo de esas energías. Se trata, pues, de casos en los que la tutela jurídico-penal se anticipa a la concreción del peligro, manifestándose, de esta manera, como **delitos de peligro**, ya sea abstracto, ya sea concreto.

Todos los delitos tipificados en esta sección *llevan implícita la intencionalidad* porque se trata de conductas dolosas, ya que las que se cometan mediando imprudencia o negligencia producirán el efecto atenuatorio de la penalidad.

El problema fundamental que va a surgir en la aplicación de estos tipos es en cuanto a la negligencia grave, puesto que en esta tipología se describen hechos habitualmente complejos, en los que intervienen muchas personas (operadores, directivos, inspectores, órganos autorizantes, de control, etc.), pudiéndose registrar diversos grados de negligencia a los que cabría atribuir efectos penales diversos.

Nos hallamos en su conjunto ante una serie de *delitos de los que se denominan de exposición o riesgo: no hace falta que se obtenga resultado objetivo alguno* mediante la conducta que se efectúe, **siendo suficiente para que se perfeccione la figura penal con que se creen situaciones de peligro o de riesgo** para personas o bienes. *La potencialidad del daño es ya socialmente reprochable*, sin que sea necesario que se desarrolle ninguna consecuencia que modifique la realidad de las cosas.

La LEN era más explícita en cuanto a la producción de resultados a que pudieran llevar las situaciones de peligro.

Tratándose en estos supuestos de penas graves, se advierte la *ausencia de factores propios de matización o gradación del riesgo*, modulación que haría ganar en equidad la imposición de aquellas.

El primer tipo con el que nos encontramos, está en el art. **341**, y dice así: “**El que libere energía nuclear o elementos radiactivos que pongan en peligro la vida o la salud de las personas o sus bienes, aunque no se produzca explosión, será sancionado con la pena de prisión de quince a veinte años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de diez a veinte años**”.

En este artículo, transposición del antiguo 84 de la LEN, se *suprime la palabra “intencionadamente” por resultar obvia, y se añade la liberación de elementos radiactivos, no prevista en la LEN*. Se advierte que la *penalidad es muy dura* (de quince a veinte años), aunque también lo era en la LEN.

El art. **342** dice lo siguiente: “**El que, sin estar comprendido en el artículo anterior, perturbe el funcionamiento de una instalación nuclear o radiactiva, o altere el desarrollo de actividades en las que intervengan materiales o equipos productores de radiaciones**

ionizantes, creando una situación de grave peligro para la vida o la salud de las personas, será sancionado con la pena de prisión de cuatro a diez años, e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a diez años”.

Con respecto al segundo párrafo del antiguo artículo 84, se *suprime también la palabra “intencionadamente”, se enriquece el tipo con la descripción de nuevas situaciones, y se añade la posibilidad de que la instalación perturbada sea de carácter radiactivo.*

El art. **343** tiene el siguiente tenor literal:

“1. El que **mediante el vertido, la emisión o la introducción en el aire, el suelo o las aguas de una cantidad de materiales o de radiaciones ionizantes, o la exposición por cualquier otro medio a dichas radiaciones ponga en peligro la vida, integridad, salud o bienes de una o varias personas**, será sancionado con la pena de prisión de seis a doce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de seis a diez años. La misma pena se impondrá cuando mediante esta conducta se ponga en peligro la calidad del aire, del suelo o de las aguas o a animales o plantas.

2. Cuando con ocasión de la conducta descrita en el apartado anterior se produjere, además del riesgo prevenido, un resultado lesivo constitutivo de delito, cualquiera que sea su gravedad, los jueces o tribunales apreciarán tan sólo la infracción más gravemente penada, aplicando la pena en su mitad superior.

3. Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de los delitos recogidos en este artículo, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años.

Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33.”

El art. **344** contempla una *responsabilidad atenuada*, para cuando los mismos hechos previstos en los artículos anteriores sean cometidos con *imprudencia grave*, con parecida redacción a la del antiguo art. 88 de la LEN.

El último artículo de esta sección, el **345**, constituye un *nuevo tipo delictivo no contemplado anteriormente*, cuya novedad trae causa de la Convención sobre Protección Física de los Materiales Nucleares hecha en Viena y Nueva York el 3 de marzo de 1980 y ratificada por España el 6 de septiembre de 1991, cuya regulación actual en nuestro ordenamiento jurídico se corresponde con el Real Decreto 1308/2011, de 26 de septiembre, sobre protección física de las instalaciones y los materiales nucleares, y de las fuentes radiactivas. Su artículo 46 se hace referencia a las posibles responsabilidades penales que pudieran originarse de la infracción de lo descrito en el citado Real Decreto, que excediera de lo que se considera como sanción administrativa en la LEN.

En concreto el citado art. **345** dispone que es constitutivo de ilícito penal el que **contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general, adquiera, posea, trafique, facilite, trate, transforme, utilice, almacene, transporte o elimine materiales nucleares u otras sustancias radiactivas peligrosas que causen o puedan causar la muerte o lesiones graves a personas, o daños sustanciales a la calidad del aire, la calidad del suelo o la calidad de las aguas o a animales o plantas**. Establece la pena de prisión de uno a cinco años, multa de seis a dieciocho meses, e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años.

Contempla un agravante para el que sin la debida autorización produjere tales materiales o sustancias y un atenuante si se hubieran cometido estos hechos por imprudencia grave.

El agravante tiene su razón de ser en que la producción de materiales o sustancias radiactivas peligrosas no puede llevarse a cabo sin la debida autorización y control administrativo del Estado.

La reforma sustituye la denominación anterior de “elementos radiactivos” por “**sustancias radiactivas peligrosas**” enfatizando de este modo el legislador el peligro que debe existir, dado que no pueden ser punibles los casos en que la radiación sea inocua o insignificante para el bien jurídico protegido.

Dentro del Capítulo III “**De los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente**”, del Título XVI “De los delitos relativos a la ordenación del territorio y la protección del patrimonio histórico y del medio ambiente”, del Libro II, hay diversos artículos que se refieren a posibles delitos cometidos *contra el medio ambiente pero utilizando la energía nuclear o las radiaciones ionizantes*.

Esta previsión del legislador penal obedece a que la progresiva *degradación del medio ambiente encontró eco en el art. 45 de la Constitución que prevé sanciones penales y administrativas, así como la obligación de reparar el daño causado, para quienes atenten contra el medio ambiente*.

Este capítulo ha sido objeto de modificación por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

Pues bien, el art. **325**, recoge una serie de *conductas agresivas* para el medio ambiente, castigando al que, contraviniendo las leyes u otras disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, **provoque o realice directa o indirectamente** emisiones, vertidos, **radiaciones**, extracciones o excavaciones, aterramientos, ruidos, vibraciones, inyecciones o depósitos, en la atmósfera, el suelo, el subsuelo o las aguas terrestres, subterráneas o marítimas, incluido el alta mar, con incidencia incluso en los espacios transfronterizos, así como las captaciones de aguas que, por sí mismos o conjuntamente con otros, cause o pueda causar daños sustanciales a la calidad del aire, del suelo o de las aguas, o a animales o plantas.

El segundo apartado contempla penas superiores en caso de que pudieran perjudicar gravemente el equilibrio de los sistemas naturales, estableciendo un tipo agravado si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas.

En el art. **327** se establecen una serie de *tipos agravados*, dependiendo de que la *industria o actividad funcione clandestinamente, sin haber obtenido la preceptiva autorización o aprobación administrativa de sus instalaciones, de que se hayan desobedecido las órdenes expresas de la autoridad administrativa de corrección o suspensión de las actividades tipificadas, o que se haya falseado u ocultado información sobre los aspectos ambientales de la actividad, o que se obstaculice la actividad inspectora de la Administración, o que se haya producido un riesgo de deterioro irreversible o catastrófico etc.*

Todos estos preceptos representan lo que se conoce como *normas penales en blanco*, o *sin contenidos nítidos*, por exigir, para incurrir en estas figuras delictivas, que *previamente se produzca la contravención de leyes o reglamentos protectores del medio ambiente*. Por lo tanto, el Juez penal debe conocer previamente la multiplicidad de normativa existente

en la materia; ello unido a las dificultades sobre el significado concreto del medio ambiente, como bien jurídico protegido, la determinación del peligro o riesgo que necesariamente ha de darse para que criminalmente se entiendan perfeccionados los hechos, son factores que *hacen de estas figuras, tipos de difusa y problemática aplicación*. La prueba de la realización de los hechos y los escasos criterios jurisprudenciales existentes en la materia que unifiquen las dispares opiniones de los jueces, aumentan la dificultad en su aplicación.

Aun cuando hay otros artículos que pudieran tener incidencia en la materia, por ser de carácter más genérico no vamos a tratarlos aquí. Sin embargo, finalmente, conviene citar el artículo **329** del Código Penal, que fue en su día bastante debatido en el seno del CSN.

El tipo descrito en el citado **329** tiene el siguiente contenido: “La Autoridad o funcionario público que, a sabiendas, hubiere informado favorablemente la concesión de licencias manifiestamente ilegales que autoricen el funcionamiento de las industrias o actividades contaminantes a que se refieren los artículos anteriores, o que con motivo de sus inspecciones hubiere silenciado la infracción de leyes o disposiciones normativas de carácter general que las regulen, o que hubiere omitido la realización de inspecciones de carácter obligatorio” será castigado con las penas correspondientes al delito de prevaricación, y además con la pena de prisión de seis meses a tres años y la de multa de ocho a veinticuatro meses. Asimismo, se castigará a la **Autoridad o funcionario público que por sí mismo o como miembro de un organismo colegiado hubiese resuelto o votado a favor de su concesión a sabiendas de su injusticia**.

Con independencia de *acentuar la penalidad en relación con los delitos comunes de prevaricación*, se ha querido construir una figura delictiva sobre la sustancia de la prevaricación, *especificándola por las notas del delito ecológico*.

Estamos ante un tipo relativamente *complejo, que exige no sólo un comportamiento ilegal, sino que la ilicitud sea manifiesta o evidente*, o sea que la injusticia sea tan obvia que personas con una formación elemental en Derecho puedan percibirla; además la actuación debe haber sido efectuada *a sabiendas*, es decir con *intención deliberada y plena conciencia de la ilegalidad* del acto que realizan, aunque también se introduce un tipo (el artículo 331) donde se recoge una conducta atenuada al cometerse por imprudencia grave.

En definitiva pues, por lo que se refiere a los delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes, puede decirse que el Código Penal ha *respetado la configuración dispuesta en la Ley de Energía Nuclear*. Por incidencia de las Convenciones Internacionales se ha añadido alguna figura nueva a las ya existentes, que en su práctica totalidad representan conductas de riesgo.

En delitos de carácter complejo como los descritos, en los que cabe la participación de personas y organizaciones de diferente naturaleza, no puede determinarse a priori el grado de responsabilidad de cada uno, sino que habrá que estar en cada caso a las circunstancias de hecho y a las determinaciones y conclusiones judiciales, siendo múltiples las circunstancias modificativas o exoneratorias de la responsabilidad que pueden darse.

Con relación a los delitos relacionados con los *recursos naturales y el medio ambiente*, en la parte que nos afecta, algunas figuras se hallan conceptualmente próximas o *relacionadas con el ejercicio de competencias propias del CSN*, como las que implican cualificaciones agravatorias al tipo básico: como la desobediencia a las acciones correctoras o suspensivas del Organismo, la obstrucción a su actividad inspectora, etc.

Al mismo tiempo y con respecto a éste último apartado, al ser posible la comisión de alguno de estos delitos mediante la emisión de radiaciones, cabría la posibilidad de duplicidad con alguno de los tipos del grupo anterior.

Con carácter general el Código Penal, manifiesta que (art. 109) la ejecución de un hecho descrito por la Ley como delito o falta obliga a reparar, en los términos previstos en las Leyes, los daños y perjuicios por él causados.

El perjudicado puede optar, en todo caso, por exigir la responsabilidad civil ante la Jurisdicción Civil.

La responsabilidad establecida comprende:

- 1) La restitución.
- 2) La reparación del daño.
- 3) La indemnización de perjuicios materiales y morales.

Deberá restituirse, siempre que sea posible, el mismo bien, con abono de los deterioros y menoscabos que el Juez o Tribunal determinen. La restitución tendrá lugar aunque el bien se halle en poder de tercero y éste lo haya adquirido legalmente y de buena fe, dejando a salvo su derecho de repetición contra quien corresponda y, en su caso, el de ser indemnizado por el responsable civil del delito, aunque esto último no es aplicable cuando el tercero haya adquirido el bien en la forma y con los requisitos establecidos por las Leyes para hacerlo irreivindicable.

La reparación del daño, según el Código Penal, podrá consistir en obligaciones de dar, de hacer o de no hacer que el Juez o Tribunal establecerá atendiendo a la naturaleza de aquél y a las condiciones personales y patrimoniales del culpable, determinando si han de ser cumplidas por él mismo o pueden ser ejecutadas a su costa.

La indemnización de perjuicios materiales y morales comprenderá no sólo los que se hubieren causado al agraviado, sino también los que se hubieren irrogado a sus familiares o a terceros.

Si la víctima hubiere contribuido con su conducta a la producción del daño o perjuicio sufrido, los Jueces o Tribunales podrán moderar el importe de su reparación o indemnización.

Los Jueces y Tribunales, al declarar la existencia de responsabilidad civil, establecerán razonadamente, en sus resoluciones, las bases en que fundamenten la cuantía de los daños e indemnizaciones, pudiendo fijarla en la propia resolución o en el momento de su ejecución.

El Código Penal expresa que toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente si del hecho se derivaren daños o perjuicios. Si son dos o más los responsables de un delito o falta, los Jueces o Tribunales señalarán la cuota de que deba responder cada uno.

Los autores y los cómplices, cada uno dentro de su respectiva clase, serán responsables solidariamente entre sí por sus cuotas, y subsidiariamente por las correspondientes a los demás responsables.

La responsabilidad subsidiaria se hará efectiva: primero en los bienes de los autores y después en los de los cómplices.

Tanto en los casos en que se haga efectiva la responsabilidad solidaria, como la subsidiaria, quedará a salvo la repetición del que hubiere pagado contra los demás por las cuotas correspondientes a cada uno.

Los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas del uso o explotación de cualquier bien, empresa, industria o actividad, cuando, como consecuencia de un hecho previsto en el Código Penal, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada, sin perjuicio del derecho de repetición contra quien corresponda.

Aun cuando se dicte sentencia absolutoria, puede haber pronunciamiento sobre la responsabilidad civil en la vía penal, salvo que las partes perjudicadas se reserven su derecho para ejercitarlo en la vía civil.

La Administración del Estado y los demás Entes Públicos, responden subsidiariamente de los daños causados por los penalmente responsables de los delitos dolosos o culposos, cuando éstos sean autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o funciones, siempre que la lesión sea como consecuencia directa del funcionamiento de los servicios públicos que les estuvieren confiados, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial derivada del funcionamiento normal o anormal de dichos servicios exigible conforme a las normas del procedimiento administrativo, y sin que, en ningún caso, pueda darse una duplicidad indemnizatoria.

Si se exigiera en el proceso penal la responsabilidad civil de la autoridad, agentes y contratados de la misma o funcionarios públicos, la pretensión deberá dirigirse simultáneamente contra la Administración o Ente Público presuntamente responsable civil subsidiario.

4. BIBLIOGRAFÍA

Gómez Tomillo, Manuel y Sanz Rubiales, Íñigo (2023). *Derecho Administrativo Sancionador. Parte General*. Ed. Aranzadi.

Barja de Quiroga, Jacobo, Granados Pérez, Carlos, Martínez Arrieta, Andrés, Martínez-Arrieta Márquez de Prado, Cristina, Villegas García, María de los Ángeles (2018). *Código Penal, comentarios, concordancias, jurisprudencia e índice analítico*. Ed Colex.